

PROCEDIMIENTO

ORDINARIO

SANCIONADOR

EXPEDIENTE: CQD/Q/CG/018/2020

DENUNCIANTE: ITE (OFICIOSO)

DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CQD/Q/CG/018/2020.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito inicial. Mediante oficio **ITE-UTCE-033/2020** de fecha tres de marzo de dos mil veinte, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (**UTCE**) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (**ITE**), remitió a la Comisión de Quejas y Denuncias (**CQyD**), copia simple del folio 1405, recibido en la Oficialía de Partes del **ITE** el quince de diciembre de dos mil diecisiete, relativo al OFICIO NÚMERO INE/UTVOPL/6868/2017 y sus anexos así como de la CIRCULAR NÚMERO INE/UTVOPL/780/2017; referente a las vistas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la resolución del Consejo General INE/CG548/2017 de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los partidos políticos nacionales con acreditación local, y los partidos políticos con registro local, correspondientes al ejercicio 2016.

II. Radicación del cuaderno de antecedentes El seis de marzo de dos mil veinte, los integrantes de la **CQyD**, radicaron el Cuaderno de Antecedentes **CQD/CA/CG/002/2020**, con el fin de allegarse de los elementos necesarios para establecer si existían indicios suficientes que hicieran presumir la probable transgresión a la normativa electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional (**PRI**), consistente en la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, y de ser así, ordenar la apertura del procedimiento sancionador atinente. Para tal efecto, se requirió al Secretario del Consejo General del **INE**, la documentación que se dejó precisada en el referido acuerdo.

III. Facultad constitucional y legal de investigación. De actuaciones se evidencia que para efectos de mejor proveer, en el acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte fue ordenado solicitar información adicional al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, orden que quedó cumplida mediante oficio ITE-PG-127/2020.

IV. Cuestión de salud pública. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial

de la Salud, declaró como pandemia el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), por la cantidad de casos de contagio en el mundo. El día trece de marzo de dos mil veinte, la Consejera Presidenta del ITE, mediante la circular 029/2020, emitió medidas orientadas a reducir el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19, entre el personal del Instituto.

El dieciséis de marzo de dos mil veinte, el Gobernador del Estado de Tlaxcala, anunció diversas medidas en relación con los trabajos de prevención de contagio de COVID-19, en el Estado de Tlaxcala; conforme a ello en Sesión Pública Ordinaria de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo General (CG) del ITE, aprobó el Acuerdo ITE-CG 16/2020, mediante el cual estableció las medidas para garantizar el funcionamiento del Instituto y prevención de la salud de las y los servidores públicos y personas que acudan a sus instalaciones, con motivo de la pandemia COVID-19. No obstante, mediante Acuerdos del Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud publicados en el Diario Oficial de la Federación los días treinta y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada.

Por lo anteriormente dicho, en Sesión Pública Ordinaria de fecha ocho de abril de dos mil veinte, el CG emitió el Acuerdo ITE-CG 17/2020, mediante el cual modificó las medidas que se aprobaron a través del diverso ITE-CG16/2020, ampliando otras para evitar la propagación del virus SARS-CoV2, y el adecuado funcionamiento y prestación de servicios que brinda el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, entre ellas, **la suspensión de los plazos para los procedimientos administrativos y procedimientos ordinarios sancionadores, que se encuentran en substanciación o resolución**, y que para su atención se requiera invariablemente de presencia física del personal en el Instituto, lo que conllevaría al traslado y permanencia en la sede del ITE, situación que sería en contravención a lo que han dispuesto las instancias de salud.

A través del diverso Acuerdo ITE-CG 23/2020, aprobado en Sesión Pública Ordinaria de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, el CG actualizó las medidas con las que cuenta el Instituto con motivo de la pandemia COVID-19, para el regreso de actividades presenciales del ITE, garantizando la protección de las servidoras y servidores públicos, así como el funcionamiento del mismo, derivado de la estrategia implementada por la Secretaría de Salud, para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa y se establecen acciones extraordinarias.

Con fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, la titular de la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del ITE, remitió de manera digital el Oficio ITE-CS-0010-2020, mediante el cual informó al Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE, que la JGE determinó atender las instrucciones emitidas por las autoridades estatales y nacionales en materia de salud pública, quienes determinaron el cambio de semáforo epidemiológico nacional del color naranja a amarillo; conforme a tales **determinaciones a partir del día catorce de septiembre del mismo año, se reactivarían los términos y plazos legales aplicables a los procedimientos sustanciados por este Instituto**, así como las respuestas de cualquier tipo de solicitud con las medidas de salubridad correspondientes, de conformidad con el párrafo segundo, anexo único, de los Lineamientos operativos de

seguridad sanitaria aplicables según el sistema de semáforo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

V. Inicio del procedimiento y emplazamiento. Mediante proveído de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, la **CQyD** dio inicio al **procedimiento ordinario sancionador** en que se actúa, asignándole la nomenclatura **CQD/Q/CG/018/2020**, y ordenando **emplazar** al denunciado **PRI**, por conducto de sus respectivos representantes ante el **CG**, y se ordenó **correr traslado** con **copia certificada** de todas y cada una de las constancias y anexos que integraban el expediente, para hacer de su conocimiento los hechos imputados, concediendo un plazo de **cinco días hábiles** contados a partir de la legal notificación del acuerdo para que se **diera respuesta y se ofrecieran pruebas** en relación a las imputaciones formuladas. emplazamiento que fue cumplido a través de la cédula de notificación realizada en fecha trece de noviembre, con personal del Partido Revolucionario Institucional.

VI. Contestación, pruebas y requerimiento. A través de proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por presente al denunciado **PRI**, dando contestación en tiempo y forma a los hechos que le fueron imputados en el presente asunto, así como ofreciendo pruebas en los términos precisados en su escrito de cuenta, mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza.

VII. Vista para alegatos. En veintisiete de noviembre de dos mil veinte fue emitido el acuerdo correspondiente, determinándose que en virtud que fueron desahogadas las pruebas ofrecidas en tiempo y forma por el denunciado, y al no existir diligencias pendientes por practicar se ordenó poner los **autos a la vista** del denunciado, para que dentro del término de **cinco días hábiles** manifestara por escrito en vía de **alegatos**, lo que a su derecho conviniera.

En fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio número INE/DS/1442/2020 y anexos, signado por la Licenciada Daniela Casar García, en su carácter de Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, al cual adjuntó medio magnético certificado que contiene la documentación relacionada con la conclusión 33. PRI/TL, del apartado 17.2.29 Comité Directivo Estatal Tlaxcala, contenida en la resolución identificada con la clave INE/CG518/2017 y que fue solicitada a razón del oficio ITE-UTCE-0/2020 (sic) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte.

VIII. Cierre de instrucción. Una vez sustanciado debidamente el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por presente al **PRI** formulando alegatos en el presente asunto.

En tal virtud, se declaró cerrada la instrucción y se instruyó al titular de la **UTCE**, procediera a formular el proyecto de resolución correspondiente, para ser sometido al conocimiento y aprobación de la **CQyD**.

IX. Sesión de la CQyD. En Sesión Extraordinaria, celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, la **CQyD** analizó, discutió y aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes, el proyecto de resolución propuesto en el presente asunto y se ordenó su remisión a la Presidencia del Consejo General del **ITE** para su trámite correspondiente.

X. Remisión del proyecto de resolución. A través de oficio **ITE-CQyD/JCMM/004/2020**, de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, el Presidente de la **CQyD** remitió el proyecto de resolución a la Consejera Presidenta del **ITE**, a fin de que lo sometiera a la consideración del pleno del **CG**.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 116, fracción IV, incisos b), c) numeral 6 y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹, en relación con los artículos 98 y 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 95 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala²; 5, 19, 20, 21 y 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala³, el ejercicio de la función electoral del Estado se encomienda al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, organismo público autónomo y autoridad competente en la materia.

En este sentido, el **CG** del **ITE**, es competente para conocer y resolver sobre el presente Procedimiento Ordinario Sancionador, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 41 base V apartado C de la Constitución; 95 de la Constitución Local; 1, 2, 19, 20, 25, 51 fracciones I, II, III, XIX, LI, 345 fracción I, 346 fracciones I, XIV, y XVII, 366, 372 al 381 de la LIPEET; 52, fracción X, y 87 apartado C, fracción I, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala⁴; 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 al 21, 41 al 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; y, 8 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Toda vez que el origen del presente procedimiento **oficioso** fue la **vista ordenada** por el **INE** en la resolución **INE/CG518/2017**, siendo atribución del **CG** vigilar el cumplimiento de todo lo relativo a las prerrogativas, derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos, y por tanto, ser el encargado de imponer las sanciones derivadas de su inobservancia.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO.

1. Precisión de los hechos y conducta denunciada. Del análisis realizado a la resolución **INE/CG518/2017**, que contiene conclusión 33. PRI/TL, del apartado 17.2.29 Comité Directivo Estatal Tlaxcala, se desprende lo siguiente:

- a) La **conducta denunciada** deriva de lo previsto por el Artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, el cual señala que es *obligación de los partidos políticos editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política*.
- b) Al respecto, el **INE** señaló tanto en el dictamen consolidado como en la resolución **INE/CG518/2017**, con la cual se dio vista a esta Comisión, lo siguiente:

Tareas editoriales

¹ En lo sucesivo Constitución.

² En lo subsecuente Constitución Local.

³ En lo sucesivo LIPEET.

⁴ En lo sucesivo LPPET.

- ◆ *De la verificación a la cuenta “Tareas editoriales”, se observó que el sujeto obligado no cumplió con la obligación de editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.*

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/10425/17 de fecha 4 de julio de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 8 de agosto de 2017.

El sujeto obligado no presentó escrito de respuesta.

Adicionalmente, de la revisión al SIF, el sujeto obligado no presentó las aclaraciones solicitadas.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/13172/17 de fecha 29 de agosto de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 5 de septiembre de 2017.

El sujeto obligado no presentó escrito de respuesta.

Aun cuando el sujeto obligado no dio respuesta a esta observación, de la revisión al SIF, se constató que no cumplió con la obligación de editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.

Cabe hacer mención que conforme al Acuerdo núm. CG 03/2016 de fecha 20 de enero de 2016, aprobado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el recurso otorgado en 2016 al sujeto obligado para el desarrollo de sus Actividades Específicas, debe emplearse exclusivamente para tal fin, siendo el rubro de Tareas Editoriales uno de los conceptos de gasto autorizados; por tal razón, la observación **no quedó atendida (conclusión 33 PRI/TL)**.

Al omitir editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación, lo procedente es dar vista al Organismo Público Local Electoral de la entidad, para los efectos legales a que haya lugar.

c) De las documentales consistentes en:

- La resolución identificada con la clave **INE/CG518/2017**;
- Dictamen consolidado respecto de la revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos que presentó el Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio 2016, así como,
- Su correspondiente “Balanza catálogos 2016”.

Se desprende la existencia de indicios suficientes que hacen presumir la probable transgresión a la normativa electoral, por parte del **PRI**, consistente en *“la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política”*, prevista por el Artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, el cual señala que:

Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala

Artículo 52. Son obligaciones de los partidos políticos:

X. Editar y distribuir por lo menos una **publicación** trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**;

2. Excepciones y defensas. Ahora bien, el partido político denunciado, al dar contestación al emplazamiento en el presente procedimiento, señaló:

“...no se pudieron realizar dichas publicaciones, toda vez, que de las prerrogativas económicas que llegan a este partido, no se cuenta con la capacidad económica para llevarlas a cabo, sin querer transgredir la normatividad que nos aplica, puesto que como Ustedes lo pueden apreciar en los dictámenes consolidados de los de los ejercicios anuales que ha aprobado el Instituto Nacional Electoral, en relación al ejercicio del recurso público que tenemos, y que obran en el expediente, hemos sido sujetos de diversas multas que nos imposibilitan poder llevar a cabo la edición y distribución de las publicaciones anteriormente señaladas, ya que el recurso público que nos ministran al partido únicamente alcanza para pagar sueldos y salarios del personal que labora en este instituto, así como para pagar los servicios públicos básicos para la subsistencia del partido, tales como luz, agua y teléfono, señalar que no se ha realizado ningún desvío de recursos, ni ejercicio indebido del mismo y solo se ha administrado en el sentido de poder realizar actividades muy básicas de nuestro instituto político. Por lo que es necesario dejar precisado que estamos imposibilitados materialmente y no contamos con la capacidad económica para poder ejercer recurso alguno y estar en la capacidad de dar cumplimiento en editar y distribuir una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política. ...”

Argumentos que en obvio de repeticiones se reproducen en su totalidad como si a la letra se insertasen en este apartado, para que surtan sus efectos correspondientes.

3. Fijación de la Litis.

Por lo expuesto, en el presente asunto se debe dilucidar si el PRI incurrió en una transgresión a la normativa electoral local, derivada de *“la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política”*.

4. Marco normativo.

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente el marco jurídico que regula la obligación de los partidos políticos respecto de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política durante el ejercicio de un año calendario. En este sentido, el marco legal señala de forma precisa lo siguiente:

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
Artículo 346. Constituyen infracciones de los partidos políticos y coaliciones:

***I. El incumplimiento de las obligaciones** establecidas en la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, de esta Ley y demás disposiciones aplicables;*

Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala

***Artículo 52.** Son **obligaciones** de los partidos políticos:*

***X. Editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**;*

***Artículo 87.** Los partidos políticos tendrán derecho al **financiamiento público** para sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las **disposiciones siguientes**:*

***C. Por actividades específicas** como entidades de interés público:*

***I.** La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las **tareas editoriales** de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el apartado A de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del apartado antes citado.*

Como se advierte, la legislación aplicable al presente caso establece como obligación de los partidos políticos el editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, con el objeto de que dichos institutos políticos cumplan con su finalidad de **coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática**, así como para tener una cultura política mejor informada, razón por la cual el legislador no sólo impuso **la obligación de realizar las publicaciones mencionadas**, sino también determinó **dotarlas de financiamiento público**, en el caso se refiere a dos actos relacionados, pero distintos, es decir por una parte se establece el derecho de los partidos políticos a acceder al financiamiento público para realizar actividades determinadas, y por otra parte, de forma clara se establecen las obligaciones específicas de los partidos políticos en el sentido de llevar a cabo las publicaciones en cuestión.

Si bien es cierto que la ley electoral local no establece puntualmente los requisitos que deben cubrir las **publicaciones** en comento, del contenido del artículo 52, fracción X, de la LPPET, así como de la doctrina jurisdiccional aportada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (**Sala Superior**), es posible obtener algunas características que estas deben cubrir, para tener por cumplida la exigencia legal prevista.

A. En primer término, podemos advertir que se trata de una obligación doble:

- a)** Editar y distribuir una publicación **trimestral de divulgación**, y
- b)** Editar y distribuir una publicación **semestral de carácter teórico y de formación política**.

Es decir, la exigencia en la realización de estas actividades, especificadas en forma diversa por su contenido y periodicidad, deja advertir que se trata necesariamente de **dos publicaciones distintas**, sin posibilidad alguna de conjuntarlas en una sola, pues carecería

de razón el que el legislador hubiera precisado la naturaleza y periodicidad de las referidas publicaciones en los términos en que lo hizo.

De esta forma tenemos, que los partidos tienen la obligación de editar, por cuanto hace a las publicaciones de **divulgación**, por lo menos **cuatro** números durante un año calendario (una publicación trimestral), y respecto de las publicaciones de **carácter teórico** y de **formación política dos** (una publicación semestral).

En esa lógica, para acreditar el cumplimiento de dicha disposición, los partidos deben proporcionar a la autoridad fiscalizadora, ejemplares de los cuatro números de la publicación de divulgación, y dos de la de carácter teórico, publicados y difundidos en el transcurso del año que corresponda.⁵

B. El carácter de las publicaciones será de divulgación, teórico y de formación política.

Ahora bien, con el propósito de esclarecer qué debe entenderse por publicaciones de divulgación y de carácter teórico, las cuales se encuentran obligados a editar y distribuir los partidos políticos, es necesario precisar que la Sala Superior, ha establecido el contenido y alcances que deben revestir este tipo de ediciones, a saber:

- a) Una publicación de **divulgación**, es aquella que con independencia de contener breves notas de información, externa la postura del partido político respecto de diversos temas de índole político-social.⁶
- b) Por su parte, una publicación que merezca ser calificada de **carácter teórica**, debe tener sustento en una investigación con rigor científico en el tema de que se trate, y ha de estar apoyada no sólo en hechos o apreciaciones de carácter subjetivo de quien lo realice, sino en conceptos doctrinarios básicos que permitan un análisis profundo y objetivo del problema de que se trate, a la par que concluya con la definición de propuestas concretas al caso, y no en una simple opinión, que en razón de quien la externa, venga a constituir solamente una posición que se adopte ante el mismo. En suma, ha de brindar a quien va dirigido, los elementos objetivos necesarios para que pueda, por sí mismo, conocer una determinada problemática, sus dimensiones y repercusiones, de manera tal que le permitan adoptar una posición propia, coincidente o no con la del editor, como la formación de una conciencia crítica, lo que así colmaría los fines de coadyuvar al desarrollo de la cultura política y la creación de una opinión pública mejor informada, razón por la cual el legislador no sólo impuso la obligación de realizar las **publicaciones** mencionadas, sino también determinó dotarlas de financiamiento público.

Todo lo anterior se confirma, con la exigencia que la ley impone de llevar a cabo una publicación **semestral**, que así permita la elaboración de un trabajo que en rigor pueda tener cierto grado de especialización y profundización en cuanto a su

⁵ Así lo sostuvo la Sala Regional Guadalajara al resolver el expediente **SG-RAP-8/2017**.

⁶ Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente **SUP-RAP-024/2000**.

contenido, y que constituya un elemento para fortalecer el desarrollo de la cultura política en la ciudadanía.⁷

C. El número de ejemplares que debe editarse.

La obligación de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, tiene su justificante en la obligación fatal de los partidos políticos de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, lo cual sólo puede lograrse mediante la distribución de un **número aceptable de ejemplares** respecto de un mismo documento, con el ánimo de llevar al conocimiento general diversas posiciones doctrinales respecto de un problema de diversa índole, bien sea de orden político, jurídico, social, económico, etcétera.

D. El origen y destino de las publicaciones debe acreditarse documentalmente hasta el punto final de su entrega.

Existe la obligación para los partidos políticos, de acreditar documentalmente la edición y distribución de las tareas editoriales, por lo cual, debe existir un control desde su recepción hasta el punto final que tuvieron sus **publicaciones**.

Lo anterior, tomando en cuenta que las tareas editoriales por su propia naturaleza, se dirigen primordialmente a la difusión de la cultura política en el país, con el objeto de beneficiar al mayor número de personas, ya sean militantes del propio partido político, afiliados, simpatizantes o ciudadanía en general.

Razón por la cual, si el instituto político al momento de emitir su contestación a la queja presentada y conforme a las pruebas ofrecidas y admitidas tampoco no presentara evidencia de la **edición** de dichos materiales, así como su **entrega** en el comité estatal, municipales y/o algún otro órgano equivalente, donde hayan sido distribuidas las **publicaciones**, se le negará la acreditación que pretenda hacer respecto del cumplimiento de esas obligaciones editoriales.⁸

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Una vez que se ha precisado el marco jurídico que rige el presente asunto, esta autoridad electoral considera que el procedimiento que aquí se analiza debe declararse **fundado** por las consideraciones que se exponen a continuación.

1. Carga probatoria.

En torno a la infracción atribuida al **PRI**, obran en autos las siguientes probanzas:

⁷ La Sala Superior, determinó los requisitos que deben cubrir las publicaciones con fines teóricas, en el criterio contenido en la Tesis CXXIII/2002, 12 de rubro: **"PUBLICACIÓN DE CARÁCTER TEÓRICO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CONTENER"**.

⁸ La Sala Superior, determinó la obligación que tiene por partidos políticos de acreditar documentalmente el origen y destino de las publicaciones correspondientes a tareas editoriales, en el criterio contenido en la Tesis CLXVIII/2002, de rubro: **"TAREAS EDITORIALES. EL ORIGEN Y DESTINO DE LAS PUBLICACIONES DEBE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE HASTA EL PUNTO FINAL DE SU ENTREGA"**.

- a) Oficio ITE-UTCE-033/2020 de fecha tres de marzo de dos mil veinte, signado por el Titular de la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral (**UTCE**) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (**ITE**), mediante el cual se informa sobre la recepción de diversas **vistas** ordenadas por el Consejo General (**CG**) del Instituto Nacional Electoral.
- b) Oficio número INE/UTVOPL/6868/2017 de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, signado por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, el cual se relaciona con la Circular INE/UTVOPL/780/2017, signado por el Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la UTVOPL del INE, relativos al cumplimiento del envío de las diversas **vistas** ordenadas por el Consejo General (**CG**) del Instituto Nacional Electoral (**INE**), dentro de las resoluciones **INE/CG516/2017; INE/CG518/2017; INE/CG520/2017; INE/CG522/2017; INE/CG524/2017; INE/CG526/2017; INE/CG528/2017; INE/CG530/2017; e INE/CG532/2017**, referentes a las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los partidos políticos nacionales con acreditación local, y los partidos políticos con registro local, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.

Mismos que fueron remitidos mediante disco óptico certificado de la documentación que se localizó en los archivos del Sistema Integral de Fiscalización, el cual contiene la capeta electrónica: conclusión 33. PRI/TL, del apartado 17.2.29 Comité Directivo Estatal Tlaxcala, contenida en la resolución identificada con la clave INE/CG518/2017, con los documentos siguientes:

- I. La resolución identificada con la clave **INE/CG518/2017**;
 - II. Dictamen consolidado **INE/CG517/2017**. Respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales con acreditación local, y los partidos políticos con registro local, correspondientes al ejercicio 2016 del Partido Revolucionario Institucional;
 - III. Su correspondiente Balanza catálogos 2016.
- c) Oficio INE/DS/1442/2020 de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, signado por la licenciada Daniela Casar García, en su carácter de Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, recibido en la oficialía de partes de la **SE** del **ITE** mediante folio 1545 de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Probanzas que por tratarse de documentos públicos adquieren **valor probatorio pleno**, de conformidad con lo previsto por los artículos 369, párrafo segundo de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción I, y 27 párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias.

- d) Al respecto, cabe precisar que el partido político denunciado, al comparecer al presente procedimiento, aportó como medios probatorios los siguientes:
1. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en los acuerdos que contienen el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, CON ACREDITACIÓN LOCAL Y CON REGISTRO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017, mismas que obran en el presente expediente.

2. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que beneficie a los intereses de esta representación.
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que se derive de la integración del expediente conformado a partir de esta denuncia, en todo lo que beneficie a los intereses de esta representación.
4. LAS SUPERVENIENTES. - En todo lo que favorezca a los intereses del Partido Político que represento y que, por causa desconocida, se alleguen a juicio.

Probanzas que conforme a lo dispuesto por los artículos 369, de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción II y 27 numeral 3, del Reglamento Quejas y Denuncias, se les concede valor probatorio pleno, a excepción de la Presuncional Legal y Humana y al Instrumental de Actuaciones las cuales deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren. **No fue admitida la señalada como “LAS SUPERVENIENTES”** en virtud de no señalar de forma clara y precisa en que hace consistir dicha probanza, además de que tampoco se actualiza el supuesto para que opere según el ofrecimiento realizado, al dejar a hechos futuros e inciertos su configuración para que surta efecto alguno, lo anterior en términos del artículo 25 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Asimismo, en el escrito de **contestación** de denuncia emitido por el **PRI**, fue señalado lo siguiente:

“...no se pudieron realizar dichas publicaciones, toda vez, que de las prerrogativas económicas que llegan a este partido, no se cuenta con la capacidad económica para llevarlas a cabo, sin querer transgredir la normatividad que nos aplica, puesto que como Ustedes lo pueden apreciar en los dictámenes consolidados de los de los ejercicios anuales que ha aprobado el Instituto Nacional Electoral, en relación al ejercicio del recurso público que tenemos, y que obran en el expediente, hemos sido sujetos de diversas multas que nos imposibilitan poder llevar a cabo la edición y distribución de las publicaciones anteriormente señaladas, ya que el recurso público que nos ministran al partido únicamente alcanza para pagar sueldos y salarios del personal que labora en este instituto, así como para pagar los servicios públicos básicos para la subsistencia del partido, tales como luz, agua y teléfono, señalar que no se ha realizado ningún desvío de recursos, ni ejercicio indebido del mismo y solo se ha administrado en el sentido de poder realizar actividades muy básicas de nuestro instituto político. Por lo que es necesario dejar precisado que estamos imposibilitados materialmente y no contamos con la capacidad económica para poder ejercer recurso alguno y estar en la

capacidad de dar cumplimiento en editar y distribuir una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política. ...”

Conforme a lo anterior, se infiere legal y válidamente que, el PRI, en efecto no llevó a cabo las tareas de difusión durante el ejercicio dos mil dieciséis, lo cual se corrobora a razón de las pruebas agregadas en actuaciones, así como de la lectura a la contestación emitida por el mismo partido político a través de su representante.

2. Hechos acreditados y presunciones.

De la valoración conjunta de las pruebas que obran en autos, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se genera convicción en este **CG**, sobre los hechos siguientes:

- a) La resolución identificada con la clave **INE/CG518/2017**, cuya **vista** dio origen al procedimiento sancionador que se resuelve, **actualmente se encuentra firme**.
- b) El **CG** del **INE** dio vista a este Instituto, con motivo de la **omisión** en que incurrió el **PRI** de demostrar la **edición y distribución** de por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, durante el ejercicio 2016.

Para ello, la autoridad electoral nacional refirió en la resolución **INE/CG518/2017**, relativa a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del **PRI**, correspondientes al ejercicio 2017, en lo que al presente asunto atañe **Conclusión 33. PRI/TL**, en donde el sujeto obligado **no llevó a cabo tareas editoriales**.

Ante la respuesta del sujeto obligado, y considerando que dicho instituto político no hizo llegar documentación o pruebas adicionales, el **CG** del **INE** determinó calificar el **incumplimiento** de la obligación aludida.

- c) Ahora bien, por cuanto hace al procedimiento ordinario sancionador que aquí se resuelve, es preciso indicar que el citado partido político, al producir su contestación al emplazamiento que le fue formulado, se concretó a señalar las causas y circunstancias que bajo su dicho le impidieron cumplir con las publicaciones señaladas en la normativa electoral, sin que de ahí de desprenda dato alguno que justifique de manera mínima la omisión en que ha incurrido.
- d) En suma, tomando en consideración las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que el **PRI no dio cumplimiento** a la obligación contenida en el artículo 52, fracción X, de la LPPET; es decir, **omitió** editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política.

3. Contestación a los argumentos propuestos.

Una vez precisado lo anterior, resulta pertinente pronunciarse en torno a los argumentos propuestos por el **PRI**, en su escrito de contestación a la denuncia, los cuales se dirigen a expresar que dadas las múltiples multas que ha enfrentado ese instituto político, le es

imposible cumplir con la publicación trimestral y semestral respectivamente señalada en la norma electoral, específicamente con lo que establece el diverso artículo 52, fracción X, del mismo ordenamiento.

En efecto, como se desprende del artículo 52, fracción X, de la LPPET, aplicable al presente caso, se establece como obligación **expresa** de los partidos políticos el **editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política**, con el objeto de que dichos institutos políticos cumplan con su finalidad de **coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática**, así como para tener una cultura política mejor informada, razón por la cual el legislador no sólo impuso la obligación de realizar las **publicaciones** mencionadas, sino también determinó dotarlas de **financiamiento público**.

En ese orden, del dispositivo legal en comento se puede advertir en primer término, que **sí existe una obligación expresa** para los partidos políticos, de realizar un número mínimo de tareas editoriales.

Las normas antes aludidas deben entenderse en el sentido de que, con independencia de las tareas consistentes en la educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política, existe la **obligación expresa** de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política**, quedando al arbitrio del partido político en cuestión, el monto específico de recursos que destinará para cada una de ellas.

Bajo este orden de ideas, este órgano colegiado considera que la responsabilidad que origina el procedimiento que se resuelve debe declararse fundada.

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la infracción denunciada y la responsabilidad del **PRI**, se procede a determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 363 de la LIPEET, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra en atención al bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

Al respecto, el artículo 358 fracción I de la LIPEET, establece las sanciones aplicables a los partidos políticos, entre las que se encuentran la amonestación pública, multa, y en su caso, con la cancelación de su registro como partido político.

I. Calificación de la falta.

Así, esta autoridad electoral para calificar debidamente la falta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 numeral 1, fracción V del Reglamento de Quejas y Denuncias, debe atender los criterios siguientes:

a. Tipo de infracción;

- b. Bien jurídico tutelado;
- c. Singularidad o pluralidad de la conducta;
- d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar;
- e. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
- f. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
- g. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

En el caso concreto se presentan las siguientes particularidades.

a. Tipo de infracción.

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
Legal. En razón de que se trata de la vulneración de un precepto de la LPPET.	El incumplimiento a la obligación de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, en el ejercicio 2016.	Artículo 52, fracción X, de la LIPPET.

b. El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).

La disposición aludida en el apartado anterior, tienden a hacer efectivo que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática, facilitando con ello a la ciudadanía la información relacionada con las actividades que desarrolla como partido político.

En el caso, tal dispositivo se conculcó con el actuar del **PRI**, derivado del incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, por ello, se procede a imponer la sanción correspondiente.

c. La singularidad o pluralidad de la conducta.

Al respecto, cabe señalar que al haberse acreditado la infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la LPPET, por parte del **PRI**, consistente en el incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, se estima que en el presente asunto se actualiza una sola infracción, es decir, solo se colma un supuesto jurídico.

d. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

1. **Modo.** En el caso a estudio, lo es el incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, por parte del **PRI**.
2. **Tiempo.** De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene por acreditado el incumplimiento por parte del **PRI**, de la multicitada obligación **durante el ejercicio 2016**.
3. **Lugar.** La falta atribuida al partido político fue cometida en el estado de Tlaxcala, dado que se trata de una norma aplicable a este ámbito geográfico.

e. Las condiciones socioeconómicas del infractor.

Conforme al Acuerdo ITE-CG 08/2021, aprobado por este **CG** el quince de enero de dos mil veintuno, se estableció que, entre otros, el **PRI** recibiría mensualmente en el presente ejercicio, el financiamiento público correspondiente para destinarlo a sus actividades ordinarias y específicas permanentes.

Motivo por el cual, en caso de imponerse alguna sanción económica al presunto infractor, este tendría los medios económicos para cumplirla, debiéndose ordenar se proceda a retener lo correspondiente de sus ministraciones mensuales correspondientes.

f. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Por cuanto hace a la reincidencia en que pudiera haber incurrido el **PRI**, este organismo público electoral local considera que no se actualiza.

En efecto, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 363, de la LIPEET, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la señalada Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son:

1. Que el infractor **haya cometido con anterioridad** una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. **Que en ejercicios anteriores** el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro: **“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”⁹**.

⁹ Consultable en

<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=REINCIDENCIA.,ELEMENTOS>

Por tal motivo, si en el caso la conducta que se analiza se concreta a lo acontecido durante el ejercicio fiscal 2016, de una búsqueda en los archivos existentes en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos ordinarios sancionadores, se desprendió que anterior al año dos mil dieciséis no existía antecedente alguno en el cual constara alguna resolución definitiva que haya causado estado por los mismos hechos que en el presente se investigan. Por lo anterior, no se cumple con el supuesto señalado que señala que existe reincidencia cuando en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.

No obstante, también debe tenerse en cuenta que la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro: ***“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”***, señala que un infractor es reincidente siempre que vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que ha sido sancionado con anterioridad, por resolución pasada por autoridad de cosa juzgada. En ese sentido, es dable considerar que a quien se le imputa una conducta reincidente, únicamente puede argumentar válidamente en su defensa, que anteriormente no se le ha sancionado por resolución firme por ningún tipo de infracción, o bien, que aun cuando ya se le sancionó por la comisión de una falta, ésta no participa de la misma naturaleza de aquella que constituye la contravención posterior. De ello, es importante concretar, que más allá del inicio de admisión por una conducta que a la postre resulte similar, la reincidencia deriva de que dicha resolución se emita previo a la realización de la conducta que resulte violatoria al mismo precepto normativo, presupuesto indispensable para determinar la actualización de esta figura.

g. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Al respecto, se estima que la omisión en que ha incurrido el **PRI**, causó un perjuicio al objetivo buscado por el legislador, consistente en que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.

No obstante, del análisis realizado a las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el **PRI no** obtuvo algún lucro o beneficio derivado de la conducta infractora.

II. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

- a)** Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra;
- b)** Sanción a imponer;
- c)** Impacto en las actividades del infractor;
- d)** Condiciones externas y medios de ejecución.

a) La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta desplegada por el **PRI**, debe calificarse con una **gravedad leve**, ya que si bien con su omisión infringió los objetivos buscados por el legislador, consistente en que los partidos

políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática, lo cierto es que la conducta realizada por el denunciado **no afectó de manera grave** el buen funcionamiento del sistema electoral en nuestro país.

Asimismo, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias, de tal forma que sea necesario tener también en consideración tales elementos para que la individualización de la sanción sea adecuada.

En este sentido, para la graduación de la falta, se han tomado en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Quedó acreditada la infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la LPPET, por parte del **PRI**, consistente en el incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política.
2. El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.
3. No existió un beneficio por parte del **PRI**, o lucro ilegalmente logrado, con motivo de la irregularidad observada.
4. No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral o reincidencia por parte del **PRI**.
5. No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
6. No se afectó en forma sustancial el buen funcionamiento del sistema electoral en nuestro país.

b) Sanción a imponer.

El catálogo de sanciones susceptibles de imponer a los partidos políticos se encuentra previsto en el artículo 358, fracción I, de la LIPEET; del tenor siguiente:

***“Artículo 358.** Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:*

I. Respecto de los partidos políticos:

a) Con amonestación pública.

- b) Con multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, según la gravedad de la falta, o el doble en caso de reincidencia.*
- c) Independientemente de otras sanciones, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de precampaña y campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso, sin embargo, la multa no podrá ser menor a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado. En caso de reincidencia, la sanción será del doble de lo anterior.*
- d) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, o con la supresión total de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que determine la resolución correspondiente.*
- e) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, en violación de las disposiciones legales.*
- f) En caso de conductas graves y reiteradas, a criterio del Instituto, que violen la Constitución, esta Ley, la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, y demás ordenamientos legales aplicables, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”*

Ahora bien, para determinar la sanción a imponer al **PRI** debe tenerse presente que la LIPEET confiere a la autoridad administrativa electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquél que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie, partidos políticos), realice una falta similar.

De esta manera, analizados los elementos referidos en el presente considerando, esta autoridad electoral estima que de las sanciones relacionadas deberá imponerse la prevista en el artículo 358, fracción I, inciso a) de la LIPEET, consistente en **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, ya que resulta adecuada para sancionar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, puede inhibir al partido político denunciado, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia, además de encontrarse conforme al parámetro que esta autoridad estima aplicable en casos de conductas de **gravedad leve**.

c) Impacto en las actividades del sujeto infractor.

Al respecto y toda vez que en el presente asunto la sanción que se determina consiste en una amonestación pública, tal situación de forma alguna merma el patrimonio del **PRI**, por ende, en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines.

d) Condiciones externas y medios de ejecución.

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PRI**, consiste en una omisión consumada durante el ejercicio 2016, y dado que se trata de una omisión no aplica lo relativo a medios de ejecución.

En tal virtud, toda vez que la finalidad del legislador es garantizar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la normatividad electoral, lo procedente es tener por **acreditada** la conducta atribuida al partido político denunciado PRI.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Este Consejo General, es **competente** para emitir la presente resolución, en términos del considerando PRIMERO.

SEGUNDO. Se tiene por acreditada **la conducta denunciada** en el procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra del **Partido Revolucionario Institucional (PRI)**, por infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, en términos de lo expuesto en el Considerando SEGUNDO, de la presente Resolución.

TERCERO. Se **impone** al **Partido Revolucionario Institucional (PRI)**, una sanción consistente en **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, atendiendo las razones expuestas en el considerando **TERCERO** de la presente resolución.

CUARTO. Notifíquese personalmente al **Partido Revolucionario Institucional (PRI)**, por conducto de sus representantes ante este Consejo General.

QUINTO. Publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de internet del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, así como en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Ordinarios Sancionadores.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las y los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en Sesión Pública Especial de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con fundamento en el artículo 72 fracciones I, II y VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. Doy fe.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones

Lic. Germán Mendoza Papalotzi
Secretario del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones